

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos séptimo a noveno, que se eliminan.

**Y teniendo en su lugar y, además, presente:**

**Primero:** Que comparece don Juan Kadis Cifuentes, en representación de don Jorge Guralnik Goluboff, con domicilio en calle Alsacia N°66, departamento 52 de la comuna de Las Condes, en contra de don Álvaro Ricardi Mac-Evoy, administrador del edificio de calle Alsacia N°66, fundado en que la recurrida procedió a cortar el suministro de energía eléctrica del departamento que ocupa el actor, por la deuda de gastos comunes que actualmente mantiene. Explica que es una persona de 79 años, que padece de una serie de enfermedades y requiere para su sobrevivencia una máquina de apnea del sueño, que tiene que estar cargada para su funcionamiento durante las noches, pues ha sido diagnosticado con una apnea del sueño. Indica que, tratándose de pacientes electro dependientes, como ocurre con el actor, su situación está regulada por el instructivo N°1-2017 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Explica que los Decretos Exentos N°141 y N°142 de 31 de mayo de 2018, aprobaron los Convenios del Estado de Chile con las empresas de suministro eléctrico, en favor de pacientes electro dependientes. Refiere que estos Convenios contemplan como



garantía el descuento de las cuentas de luz y la imposibilidad del corte de suministro, para pacientes con esa condición. Explica que el corte de electricidad que ha afectado al actor se fundamenta en el artículo 5 de la Ley N°19.537, que faculta a la administración de los edificios para que, con el acuerdo del Comité de Administración, suspenda o requiera la interrupción del servicio eléctrico de aquellas unidades del edificio que se encuentren en mora en el pago de los gastos comunes de tres o más cuotas, continuas o discontinuas. Concluye que el caso del actor debe dársele el tratamiento contenido en la normativa para pacientes electro dependientes, y que el corte del suministro y/o amenaza de corte en el futuro del abastecimiento de energía eléctrica es un acto que vulnera las garantías constitucionales del número 1 y 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto, ordenando reponer el servicio eléctrico que ha sido interrumpido.

**Segundo:** Que la recurrida informó que, al haber tomado conocimiento de la interposición de este recurso de protección, procedió a reconectar el servicio eléctrico del actor a la espera de lo que se decida finalmente en esta causa. Explica que el acto que se le imputa no es arbitrario ni ilegal, pues se ajusta a lo



dispuesto en el artículo 5 de la Ley N°19.537 y al Reglamento de Copropiedad del Edificio.

**Tercero:** Que la sentencia recurrida rechazó el recurso deducido, concluyendo que es un hecho no controvertido que el actor sí adeuda los gastos comunes que se le imputan y que la recurrida ha actuado conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley N° 19.537.

**Cuarto:** Que la controversia de estos autos se circunscribe a determinar si la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, con motivo del ejercicio de la facultad descrita en el artículo 5 de la Ley N°19.537, que faculta a la administración de un edificio a cortar el suministro eléctrico de los residentes si no han dado cumplimiento a su obligación de pagar los gastos comunes en las condiciones que se detallan en esa disposición o si, por el contrario, el ejercicio de esa facultad se ve impedido si se trata de pacientes que por condiciones médicas, son catalogados de electro dependientes, como ocurre con el actor de estos autos y que requieren monitores de apnea para subsistir.

**Quinto:** Que, acorde dispone el artículo 5 de la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, el Reglamento podrá autorizar al Administrador, previo acuerdo del Comité de Administración, a disponer el corte de suministro eléctrico a aquellas unidades cuyos



propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas de gastos comunes.

Por su parte, el análisis de los Decretos Exentos N°141 y 142 del Ministerio de Energía, que aprueban acuerdos de colaboración e innovación para grupos vulnerables celebrados entre dicha cartera de Estado y las cooperativas y empresas eléctricas, con el propósito de avanzar con el impacto que puede provocar la falta o interrupción del suministro eléctrico para personas electro dependientes, permite concluir que existe un acuerdo en orden a reconocer la situación de las personas afectadas por un corte eléctrico, manteniendo el suministro en estos casos pese a existir una deuda, subsistiendo la cobranza judicial que pudiera haberse iniciado.

**Sexto:** Que, en consecuencia, si bien los Decretos hechos valer por el recurrente se refieren a la situación específica de un Convenio suscrito entre las cooperativas y empresas eléctricas y el Ministerio de Energía, el fundamento de ellos radica, en lo que incide en este recurso, en resguardar suficientemente el derecho a la vida y a la salud de los pacientes electro dependientes que pueden verse afectados por los cortes de energía eléctrica, y constatándose que en este caso, no hay controversia sobre la calidad de paciente electro dependiente del actor. Es posible concluir que el acto de



la recurrida de cortar el suministro eléctrico es arbitrario y vulnera y amenaza el derecho a la vida del actor, afectándose la garantía constitucional, consagrada en el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República, debiendo el recurso ser acogido.

**Séptimo:** Que con posterioridad a que la causa quedó en estado de acuerdo ante esta Corte Suprema, el 3 de diciembre de 2020, se recibió el Oficio del Tribunal Constitucional dando cuenta del inicio de la causa Rol N°9747-20 INA, por requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley N°19.537, deducido por el recurrente de estos autos, decretándose la suspensión del procedimiento.

**Octavo:** Que con fecha 13 de julio del presente año, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley N°19.537, y hace aplicable al caso del recurrente lo dispuesto en la Ley N°21.304, publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 2021, que se refiere expresamente a la situación que afecta a los pacientes electro dependientes, con los cortes de suministro de energía eléctrica y pese a que la mencionada ley aún no entra en vigencia, concluyó que al caso de marras resulta inaplicable el artículo 5 de la Ley N°19.537, constándose una vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 números 1 y 2 de la Constitución Política de la República.



**Noveno:** Que en consecuencia, careciendo de sustento legal y habiéndose establecido su carácter arbitrario, el proceder de la recurrida es contrario a las normas constitucionales vigentes, de tal suerte que el recurso debió ser acogido.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, **se revoca** la sentencia apelada de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido, debiendo la recurrida cesar y abstenerse en lo sucesivo de cortar el suministro eléctrico del actor, atendida su condición de paciente electro dependiente.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Señor Muñoz.

Rol N° 133.870-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sra. María Angélica Repetto G., y por el Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber cesado en funciones.





Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., María Angélica Cecilia Repetto G. y Abogado Integrante Alvaro Quintanilla P. Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

